



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control:	Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación:	150013333004 2020 00064 00
Demandante:	Víctor Alfonso Mora Vargas
Demandado:	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES y la Nación – Ministerio de Educación

I. ASUNTO

El proceso ingresa al Despacho para efecto de fijar fecha y hora para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, por aplicación del artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el parágrafo 2.º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se adoptarán las decisiones del caso.

II. ANTECEDENTES

- Mediante auto de 27 de agosto de 2020, el Despacho admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Víctor Alfonso Mora Vargas frente al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES y la Nación – Ministerio de Educación.

- Durante el trámite del proceso, a través de la Resolución N° 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 y mitigar sus efectos. Como consecuencia de lo anterior, a través de diferentes Acuerdos, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la suspensión de términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio del mismo año. Reanudándose los mismos, por medio de Acuerdo PCSJA-11567 de 5 de junio de 2020, en cuanto ordenó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del día 1.º de julio de 2020, inclusive, y dispuso las medidas pertinentes para la reanudación de la atención al público, el normal funcionamiento de los despachos judiciales y se dictaron otras medidas de salubridad pública y fuerza mayor.

- La demanda fue contestada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES y la Nación – Ministerio de Educación dentro del término legal, a través de memoriales radicados en el correo electrónico del Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos.

- Durante el traslado de las excepciones propuestas por las entidades demandadas, la parte demandante guardó silencio.

- Asimismo, durante este decurso procesal, por medio de Ley 2080 de 2021, el legislador reformó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley

1437 de 2011- y dictó otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.

En este orden, el artículo 86 de la reforma establece lo siguiente:

“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

(...)

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.” (Destaca el Despacho).

III. CONSIDERACIONES

En esta fase procesal, con sujeción al principio general de aplicación inmediata de las leyes procesales¹, el presente asunto debe tramitarse al tenor de lo dispuesto en la Ley 2080 de 2021², que dispone la resolución de las excepciones previas, según la regulación de los

¹ Código General del Proceso. Artículo 624. *Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:*

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

² Artículo 38. *Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:*

“Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

artículos 100, 101 y 102 del CPG. En consecuencia, el Despacho deberá resolver las excepciones previas establecidas en el artículo 100 del CGP³, cuando no requieran práctica de pruebas antes de la audiencia inicial.

En el caso bajo estudio, la demanda fue contestada en término por parte de la **Nación – Ministerio de Educación**, que formuló los siguientes medios exceptivos denominados: i) Inepta demanda por falta de agotamiento de la actuación administrativa frente al Ministerio de Educación Nacional, ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva, iii) Inexistencia de la obligación, iv) Falta de título y causa, v) Prescripción, vi) Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, vii) Buena fe y viii) genérica.

Por su parte, la demanda también fue contestada en término por parte del **Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES**, que planteó los siguientes medios exceptivos denominados: i) Inexistencia de la indebida notificación de los actos administrativos censurados, ii) Inexistencia de la obligación en la modificación de la calificación obtenida por el demandante y ausencia del derecho de ascenso o reubicación salarial, iii) Inexistencia de las causales de nulidad, iv) ineptitud sustantiva de la demanda, v) caducidad, vi) falta de legitimidad en la causa por pasiva y iv) genérica. Al respecto, el Juzgado considera que las excepciones denominadas “inexistencia de la obligación”, “falta de título y causa”, “buena fe”, “inexistencia de la indebida notificación de los actos administrativos censurados”, “inexistencia de la obligación en la modificación de la calificación obtenida por el demandante y ausencia del derecho de ascenso o reubicación salarial” e “inexistencia de las causales de nulidad” constituyen argumentos encaminados a discutir el fondo del asunto, razón por la cual se abordarán al momento de proferir la decisión de primera instancia, que resuelva las pretensiones de la demanda.

Con relación a la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, planteada por ambas entidades, esta no corresponde a una excepción previa de las listadas en el artículo 100 del CGP, si bien el numeral 3.º del artículo 182A del CPACA prevé la posibilidad de declarar probada la excepción de “falta manifiesta de legitimación en la causa”, por disposición del inciso final del párrafo segundo del artículo 175 *ibidem*, esta deberá declararse en sentencia anticipada cuando se encuentre fundada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, es decir, en cualquier estado del proceso cuando el juzgador la encuentre probada, circunstancia que no ocurre en el presente caso; valga

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.”

³ “1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.”

señalar que este aspecto, como presupuesto para la prosperidad de las pretensiones, se sujetará a las pruebas que se practiquen en el proceso y será valorado en sentencia ordinaria.

En lo que concierne a la excepción de “prescripción de derecho”, de acuerdo con la norma en mención, se predica igual situación, es decir, que debe declararse en sentencia anticipada cuando se encuentre fundada. Así las cosas, como la excepción propuesta no tiene la naturaleza de previa, y que su objeto es controvertir la existencia del derecho por el transcurso del tiempo y la inactividad de la demandante, al no estar reunidas las condiciones para declararla fundada mediante sentencia anticipada, la misma deberá resolverse en sentencia ordinaria, una vez se defina la prosperidad de la pretensión reclamada.

Bajo este entendido, en esta oportunidad procesal, el Juzgado resolverá sobre las excepciones previas planteadas por ambas entidades, que para el caso son: inepta demanda, falta de legitimación en la causa por pasiva y caducidad.

Puntualizado lo anterior, el Despacho pasa a pronunciarse en el siguiente orden:

- **Excepciones previas propuestas por las entidades demandadas**
- **Inepta demanda**

La **Nación – Ministerio de Educación** argumentó que es obligatorio que quien pretenda demandar un acto administrativo, debe agotar la actuación administrativa antes de acceder a la jurisdicción contenciosa, reclamación que se adelanta ante la entidad pública llamada a reconocer o extinguir el derecho invocado conforme lo definió el Consejo de Estado en providencia de 28 de febrero de 2018 y según lo preceptúa los artículos 76 inciso 3° y 161 numeral 2° del CPACA. Descendiendo al caso en concreto, indicó que el demandante no elevó petición ante el Ministerio de Educación Nacional, y no existe pronunciamiento por parte de la entidad ni acto administrativo por demandar, configurándose de esa manera, la inepta demanda.

Por su parte, el **ICFES** señaló que como en el presente caso, lo que se ataca son los resultados de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativo y la respuesta expedida por esa entidad, se trata de actos de trámite, por lo que resulta improcedente.

Consideraciones: Al respecto, lo primero por mencionar es que la excepción de inepta demanda se configura por la falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones como lo ha señalado el Consejo de Estado en providencia de 7 de marzo de 2019⁴.

Valga precisar, que si bien en el caso que nos ocupa no fue enjuiciado algún acto expedido por la Nación – Ministerio de Educación, el Despacho estima que a parte de estar en discusión la legalidad de los actos emitidos por el ICFES - resultados de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativo y la respuesta expedida por esa entidad -, la pretensión encaminada a que se ordene el reconocimiento y pago de la reubicación salarial, así como

⁴ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

el reajuste de los factores salariales percibidos por el docente Víctor Alfonso Mora Vargas, involucra a la Nación – Ministerio de Educación, en la medida que es dicha entidad la encargada de remitir el listado de candidatos para ascenso o reubicación salarial a las entidades territoriales certificadas en educación tal como lo dispone el artículo 16 de la Resolución N° 018407 de 29 de noviembre de 2018⁵, que dice así:

*“Artículo 16. Publicación de la lista de candidatos para ascenso o reubicación de quienes superaron la evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF). **El listado de candidatos para ascenso o reubicación salarial será remitido por el Ministerio de Educación Nacional a las entidades territoriales certificadas en educación** para que dichas entidades procedan a publicar el listado de que trata el artículo 2.4.11.4.4.2 del Decreto 1075 de 2015. (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

A partir de la publicación del listado de candidatos, la entidad territorial certificada contará con 15 días para expedir el acto administrativo de reubicación salarial dentro del mismo grado o de ascenso de grado en el Escalafón Docente, según el caso, siempre y cuando estén acreditados todos los requisitos establecidos para el efecto.”

Con base en lo anterior, se concluye que pese a que no se discute un acto emanado de la Nación – Ministerio de Educación y por tanto no existe reclamación efectuada por el demandante ante esa cartera ministerial, como dicha entidad es la encargada de la supervisión y reglamentación del ascenso de grado o la reubicación salarial, y es a la que le corresponde la variación de la información en la hoja de vida de los docentes, es pertinente su concurrencia a esta actuación.

En torno a lo manifestado por el ICFES, de que los actos demandados son de trámite y no definitivos, el Consejo de Estado ha sostenido la siguiente diferencia:

*“Ahora bien, es cierto que los únicos actos susceptibles de la Acción Contenciosa Administrativa son los actos definitivos, es decir que se excluyen los de trámite, pues éstos se controlan jurisdiccionalmente como parte integrante del acto definitivo y conjuntamente con éste, es decir de aquel que cierra la actuación administrativa. No obstante, el que un acto sea definitivo, no depende siempre de hallarse situado en el final del trámite, pues puede ser que cierre un ciclo autónomo de la actuación administrativa claramente definido y que como tal pueda ser impugnado mediante la acción de nulidad”.*⁶ (Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, al revisar la Resolución N° 018407 de 29 de noviembre de 2018, en sus artículos 14 y 16, se tiene en primer lugar, que los resultados de los docentes que no presenten reclamación quedarán en firme una vez vencido el término para interponer las reclamaciones⁷, y que luego de estar conformada la lista de candidatos para ascenso o

⁵ Por medio del cual se establecieron las reglas y la estructura del proceso de evaluación que tratan los artículos 35 y 36 (numeral 20) del Decreto Ley 1278 de 2002 para el ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial de los educadores oficiales regidos por dicha norma y se dictan otras disposiciones

⁶ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, 8 de marzo de 2012.

⁷ “Artículo 14. Publicación de resultados.

(...)

El resultado de los educadores que no presenten reclamaciones sobre su evaluación quedará en firme desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer reclamaciones.” (Subrayado fuera de texto)

reubicación salarial, el Ministerio de Educación Nacional la remitirá a las entidades territoriales certificadas en educación para que expidan el acto administrativo de reubicación salarial dentro del mismo grado o de ascenso de grado en el Escalafón Docente⁸.

Así las cosas, este Estrado Judicial considera que los actos aquí enjuiciados no son de trámite, pues publicada la lista de candidatos, eso constituyó un acto que definió la situación jurídica del demandante y que produjo efectos jurídicos, en el sentido que luego de realizada la evaluación, al no obtener el puntaje requerido, no le es posible alcanzar el ascenso o reubicación salarial. Adicionalmente, hay que tener en cuenta, que no existe un acto administrativo proferido por el ente territorial en el que se niegue el ascenso o reubicación, por lo que se reitera que los actos demandados fueron los que resolvieron la situación jurídica del docente, lo que lleva a que la excepción formulada se declarará no probada.

- Falta de legitimación en la causa por pasiva

La **Nación – Ministerio de Educación** expresó que lo que se debate es una pretensión derivada de la relación entre el trabajador y el ente territorial, que es el competente para resolver de fondo la litis, insistió en los argumentos relacionados a que los actos demandados fueron expedidos por el ICFES y no por la Nación – Ministerio de Educación, e indicó que de acuerdo a la Ley 715 de 2001, la administración del servicio educativo ya no sería nacionalizada sino descentralizada en cada una de las entidades territoriales, por lo que no es la entidad llamada a responder a los hechos y pretensiones de la demanda.

El **ICFES** sostuvo que en el marco de sus competencias, no tiene la facultad legal para pagar sumas de dinero provenientes de factores salariales, ni le corresponde expedir los actos de ascenso o reubicación salarial.

Consideraciones: Frente a las anteriores manifestaciones, conviene señalar que la legitimación en la causa por pasiva puede ser de hecho o material, la primera, es aquella originada entre las partes a partir de la integración del contradictorio, y la segunda, la que se configura cuando quien es llamado a responder por la pretensión, en efecto, tiene el deber jurídico de satisfacerla.

En otras palabras, la legitimación de hecho en la causa por pasiva deviene de la presentación de la demanda y la notificación del auto admisorio, lo cual no necesariamente trae aparejada la legitimación material, consistente en la real participación de los hechos que fundamentan las pretensiones del demandante, aspecto que se sujeta a las pruebas

⁸ "Artículo 16. Publicación de la lista de candidatos para ascenso o reubicación de quienes superaron la evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF). El listado de candidatos para ascenso o reubicación salarial será remitido por el Ministerio de Educación Nacional a las entidades territoriales certificadas en educación para que dichas entidades procedan a publicar el listado de que trata el artículo 2.4.11.4.4.2 del Decreto 1075 de 2015. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

A partir de la publicación del listado de candidatos, la entidad territorial certificada contará con 15 días para expedir el acto administrativo de reubicación salarial dentro del mismo grado o de ascenso de grado en el Escalafón Docente, según el caso, siempre y cuando estén acreditados todos los requisitos establecidos para el efecto."

practicadas en el proceso, su valoración y a la conclusión a la que el fallador arribe en sentencia y, por tanto, presupuesto para la prosperidad de las pretensiones.

De conformidad con lo expuesto, al considerar que se ha propuesto la falta de legitimación en la causa de tipo material, el mismo corresponde a un tema de fondo que no es pasible de resolverse de manera previa, por consiguiente, el Despacho resolverá la excepción al momento de proferir sentencia de primera instancia.

- Caducidad

La **Nación – Ministerio de Educación** aseveró que en el expediente no obra prueba siquiera sumaria de la fecha del acto administrativo que originó esta acción, y subrayó que entre la expedición del acto demandado y la presentación de la demanda transcurrieron más de cuatro (4) meses. Finalmente, a fin de sustentar esta excepción, solicitó que se oficiara al ICFES para que suministrara la constancia de notificación de los actos demandados. Respecto a la solicitud probatoria, el Juzgado no accederá en la medida que con los documentos allegados con la demanda es posible resolver la excepción planteada.

El **ICFES** argumentó que, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el literal d) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el interesado cuenta con cuatro (4) meses para iniciar la acción. Para el caso en concreto, afirmó que había operado el fenómeno de la caducidad por cuanto las fechas de publicación de la respuesta a la reclamación, la radicación de la solicitud para la conciliación prejudicial y de la demanda fueron las siguientes:

- Fecha de publicación de la respuesta a la reclamación: 6 de noviembre de 2019.
- Fecha de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial: 5 de marzo de 2020.
- Fecha de la audiencia de conciliación prejudicial: 11 de mayo de 2020.
- Fecha de radicación de la demanda: 6 de julio de 2020.

De lo anterior, agregó que a falta de 2 días para que operara la caducidad del medio de control, el actor presentó la solicitud de audiencia – 5 de marzo de 2020 -, la cual suspendió los términos hasta el 11 de mayo de 2020, día en el cual se declaró fallida la diligencia y fecha en la cual se encontraban suspendidos los términos, reanudándose los mismos el 1° de julio de 2020 según lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que la parte actora tenía hasta el 2 de julio de 2020 para presentar la demanda, aun así, el libelo introductorio se radicó el 6 de julio de 2020, configurándose de esa manera la caducidad.

Consideraciones: Sobre el particular, cabe destacar que conforme a los tiempos descritos por el ICFES y que se corroboran con los anexos de la demanda, la parte actora tenía en principio hasta el 2 de julio de 2020 para presentar la demanda, sin embargo, lo hizo hasta el 6 de ese mes y año, lo que implicaría que el libelo introductorio fue elevado por fuera del término, no obstante, dada la emergencia sanitaria originada en nuestro país el año pasado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 564 de 2020 que en su artículo 1° inciso 2° contempló lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas

ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.” (Subrayado fuera de texto).

En consecuencia, el término para radicar la demanda se extendía hasta el 2 de agosto de 2020 y como su presentación fue el 6 de julio de ese año, se declarará no probada la excepción de caducidad.

En lo que concierne a la **excepción de prescripción**, por disposición del inciso final del párrafo segundo del artículo 175 *ibidem*, esta deberá declararse en sentencia anticipada cuando se encuentre fundada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, es decir, en cualquier estado del proceso cuando el juzgador la encuentre probada. Así las cosas, como la excepción propuesta no tiene la naturaleza de previa, y que su objeto es controvertir la existencia del derecho por el transcurso del tiempo y la inactividad del demandante, al no estar reunidas las condiciones para declararla fundada mediante sentencia anticipada, la misma deberá resolverse en sentencia, una vez se defina la prosperidad de la pretensión reclamada.

- **Otras disposiciones**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, advertir que las partes y demás sujetos procesales deberán realizar todas las actuaciones a través de medios tecnológicos, y enviar un ejemplar a los extremos procesales de todos los memoriales o actuaciones que realicen (preferiblemente en formato PDF), de manera simultánea con copia incorporada al mensaje enviado al Despacho, a través de los canales digitales que a continuación se señalan, según la información que reposa en el proceso:

Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja	correspondenciajadmtn@ceudoj.ramajudicial.gov.co
Ministerio Público	procjudadm177@procuraduria.gov.co
Parte demandante	contacto@abogadosomm.com ;
Parte demandada Nación – Ministerio de Educación	notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co ; ministerioeducacionballesteros@gmail.com ;
Parte demandada ICFES	notificacionesjudiciales@icfes.gov.co ; lkmartinez@icfes.gov.co ;

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Tener por contestada la demanda por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES y la Nación – Ministerio de Educación.

SEGUNDO.- Declarar no probadas la excepciones de ineptitud de demanda y caducidad, planteadas por las entidades demandas, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Diferir al momento de la sentencia, las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, falta de título y causa, prescripción, buena fe, inexistencia de la indebida notificación de los actos administrativos censurados, inexistencia de la obligación en la modificación de la calificación obtenida por el demandante, falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia del derecho de ascenso o reubicación salarial e inexistencia de las causales de nulidad, presentadas por las entidades demandadas.

CUARTO.- Advertir a las partes, sus apoderados y demás sujetos procesales que deben realizar todas sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Además, deben dar cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del CGP, consistente en la remisión de un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso a todos los extremos procesales (artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011), a través de los canales digitales reseñados en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO.- Reconocer personería a la abogada Rocío Ballesteros Pinzón, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.436.224 y T.P. N° 107904 C.S.J., para actuar como apoderada de la Nación – Ministerio de Educación, para los efectos y fines previstos en el memorial poder obrante en el expediente.

SEXTO.- Reconocer personería a la abogada Lilian Karina Martínez, identificada con cédula de ciudadanía N° 53.082.105 y T.P. N° 184486 C.S.J., para actuar como apoderada del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, para los efectos y fines previstos en el memorial poder obrante en el expediente.

SÉPTIMO. - Una vez en firme la presente decisión, el asunto pasará al Despacho para disponer el trámite procesal que legalmente corresponda.

Notifíquese⁹ y cúmplase

9

Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por
estado electrónico N.º 38
de hoy 27 de agosto de 2021, a las 8:00 a. m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario

PS

Firmado Por:

Angela Maria Jojoa Velasquez
Juez Circuito
004
Juzgado Administrativo
Boyaca - Tunja

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

687cf437f299f54d9562ef434d826934fe8331a8fbe9dd3f986a9116c4c95bbe

Documento generado en 26/08/2021 03:07:06 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>